



LAS MODALIDADES más usadas de soborno, según la opinión de los empresarios, son los pagos para acelerar trámites (65 por ciento) y contribuciones políticas (54 por ciento). /Fuente: Transparencia por Colombia y Universidad Externado

• La corrupción en el sector público (50 por ciento) y la competencia desleal (38 por

ciento) son los mayores obstáculos para la implementación de prácticas contra el soborno.

• Sucursales y subsidiarias. Solo el 8 por ciento de las empresas que cuentan con sucursales han establecido sanciones para las sucursales y subsidiarias en caso de que se involucren en un acto de soborno.

• Proveedores. Las empresas son más fuertes en la verificación de datos que en la extensión de políticas contra el soborno con los proveedores. El 64 por ciento realiza una verificación de datos e idoneidad, pero solo el 29 por ciento comunica su posición de rechazo al soborno.

• El 58 por ciento de las empresas no cuenta con ningún canal de comunicación confi-

dencial para empleados o para terceros que deseen denunciar posibles casos de soborno.

Llamado de alerta

Para Transparencia por Colombia "los resultados de la encuesta son un llamado a moverse contra el soborno, a tener la posición contundente de 'no pago, no ofrezco, no pido, no recibo sobornos'".

Según Carolina Cadavid, directora del Área de Sector Privado, es necesario que además de la regulación estatal, "la autorregulación sea promovida desde los diversos sectores empresariales para fomentar la competencia justa; fortalecer la cadena de valor en ética y estimular la creación de canales de denuncia confidenciales de casos de soborno".



LA MINISTRA Ruth Stella Correa con el secretario general adjunto de la OCDE, Rintaro Tamaki, en París, Francia. /Foto Andrew Wheeler (OCDE)

Colombia en la Convención Contra el Cohecho

En diciembre, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció desde París, Francia, la adhesión de Colombia a la Convención para Combatir el Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Efectivamente, el 19 de enero Colombia se convirtió en el 40 estado en formar parte de la Convención.

"El cohecho distorsiona los mercados y aumenta el costo de las operaciones comerciales", dijo Correa, agregando que "para Colombia ser el país número 40 firmante de la convención contra el cohecho transnacional resulta de la mayor importancia porque pasa a ser integrante de uno de los grupos más importantes en la lucha contra la corrupción a nivel mundial".

La funcionaria señaló que con la suscripción de la convención, Colombia tendrá que "implementar una cantidad de normas internas con el fin de luchar contra la corrupción".

El secretario general adjunto de la Oede, Rintaro Tamaki, aseguró que "la adhesión de Colombia a la Convención es una poderosa señal para los Gobiernos y las empresas de América Latina acerca de la importancia de la colaboración en la lucha contra la corrupción".

La Convención, que entró en vigor en 1999, declara ilegal el soborno de funcionarios públicos en el contexto de las operaciones comerciales internacionales. Mediante la supervisión de los países y el amplio seguimiento entre ellos para su aplicación, la Convención procura velar por la eficacia de la lucha contra el cohecho y así crear condiciones de competencia equitativas.

La Convención

Es un acuerdo a través del cual los países establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den, ofrezcan

o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.

Tiene como objetivo eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales; castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan, ofrezcan, encubran u otorguen pagos a servidores públicos extranjeros, con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios; impulsar el intercambio de información y la cooperación jurídica internacional para combatir el cohecho transnacional.

Los delitos establecidos en la Convención son el cohecho internacional de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, así como el lavado de dinero y otros de tipo contable.

Las penas incluyen la privación de la libertad, sanciones económicas y suspensión o disolución de la empresa. De solicitarlo un gobierno extranjero será motivo de extradición.

El dinero o el bien utilizado para cometer el cohecho, o el beneficio obtenido por ofrecerlo, pueden ser embargados y decomisados o se pueden imponer sanciones económicas comparables.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde fue cometido el cohecho.

Los 40 firmantes de la Convención son Alemania, Chile, Finlandia, Japón, Reino Unido, Argentina, Colombia, Francia, Luxemburgo, República Checa, Australia, Corea, Grecia, México, República Eslovaca, Austria, Dinamarca, Hungría, Noruega, Rusia, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil, España, Islandia, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Estados Unidos, Israel, Polonia, Suiza, Canadá, Estonia, Italia, Portugal y Turquía.